



Poder Judicial de la Nación

FP

**CÉDULA DE  
NOTIFICACIÓN**

**23000071297272**



TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1, SITO EN

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES:

Sr.: LUIS MARCELO NUÑEZ  
Domicilio: 20208930363  
Tipo de Domicilio: Electrónico  
Carácter: Sin Asignación  
Observaciones Especiales: Sin Asignación

	25423/2023				3	N	N	N
Nº ORDEN	EXPTE. Nº	ZONA	FUERO	JUZGADO	SECRET.	COPIAS	PERSONAL	OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

**GENERGIABIO CORRIENTES S.A c/ AFIP-DGI s/MEDIDA CAUTELAR  
AUTÓNOMA**

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

San Nicolás, de septiembre de 2023.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.: MARIA GABRIELA FERRERO REGIS, SECRETARIA DE JUZGADO

En .....de.....de 2023, siendo horas .....

Me constituí en el domicilio sito en.....

.....

Y requerí la presencia de.....

y no encontrándose .....

fui atendido por: .....

.....

D.N.I; L.E; L.C; N°.....

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien manifiesta ser:

.....

.....

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de .....

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-



Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

25423/2023

San Nicolás, 2023.- MEM

### **AUTOS Y VISTOS:**

Los presentes autos caratulados "ENERGIABIO CORRIENTES S.A. C/ AFIP - DGI s/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA", Nro. FRO 25423/2023, que tramitan ante este Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, Secretaría Nro. 3, de los que,

### **RESULTA:**

I.- Que en fecha 04/09/2023 se presenta el Sr. Manuel Barandiaran Landin, en su carácter de Presidente de Genergiabio Corrientes S.A., con el patrocinio del Dr. Luis Marcelo Nuñez y solicita el urgente dictado de una MEDIDA CAUTELAR, por medio de la cual se suspendan los efectos de la Resolución General (AFIP) Nro. 5391/2023 (en adelante, la "RG 5391") respecto de la Sociedad. En particular, solicita se ordene a la AFIP - DGI que se abstenga de:

a) Emitir boleta de deuda, efectuar intimaciones administrativas y/o judiciales, ejecutar, embargar, solicitar o trabar cualquier tipo de medida cautelar, en particular, inscripciones o inhibiciones generales o particulares de disposición de bienes, denegar certificados para contratar con el Estado Nacional o cualquiera de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, así como cualquier otro acto o medida que directa o indirectamente, tanto administrativa como judicialmente, se relacione con el cobro del pago a cuenta implementado por medio de la RG 5391 (en adelante el "Anticipo"), incluyendo los



#38213281#385586160#20230927122416730

intereses resarcitorios y/o punitorios, y cualquier otro accesorio.

b) Exhibir y/o reportar en los sistemas de dicha AFIP-DGI (incluyendo pero no limitado al "Sistema de Cuentas Tributarias") o aquellos compartidos con cualquiera de las reparticiones o entes estatales, la existencia de deuda en concepto de Anticipo, sus intereses (resarcitorios y punitorios) y demás accesorios, así como también impedir y/u obstaculizar con motivo de ello el trámite y/o regular aplicación de regímenes especiales y/o promocionales de la actividad desarrollada por la Sociedad, dentro de ellos impositivos, aduaneros y/o de cualquier otra índole (Sistema de Devolución Anticipada de IVA, Categorización SIPER, certificado de libre deuda, planes de pago disponibles, entre otros), y/o aplicar sanciones que interfieran y/u obstaculicen y/o perjudiquen el normal desarrollo de su actividad.

Preliminarmente, hace una descripción de la normativa impugnada -RG 5391-, para luego referirse, específicamente, a la aplicación de la misma a la sociedad actora.

Expresa que Genergiabio Corrientes S.A., de conformidad con su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 2022, tuvo como resultado impositivo una ganancia de \$ 1.426.923.423,02, previo al cómputo de los quebrantos originados en ejercicios anteriores. Sin perjuicio de ello, la Sociedad no ha determinado Impuesto a las Ganancias en el período 2022, ya que el cómputo de los quebrantos originados en períodos anteriores en los términos del artículo 25 de





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

la ley de Impuesto a las Ganancias absorbió la totalidad de la ganancia impositiva del período 2022, sin perjuicio del posible traslado a ejercicios futuros.

Explica que la Sociedad debería pagar un Anticipo de \$214.038.513,46, mientras que para el ejercicio 2023 se proyecta una pérdida impositiva de \$ 192.982.140,69, lo que se traduce en un pago a cuenta incausado que generará (mejor dicho, aumentará) un saldo a favor de incierta utilización y sujeto a permanente desvalorización por inflación, lo que genera un perjuicio irreparable que se traduce en un verdadero despojo.

Señala que el 17/08/2023 (es decir, antes del vencimiento de la primera cuota del anticipo, esto es, el 22/08/2023), la Sociedad presentó ante la AFIP un reclamo impropio, en los términos del artículo 24, inciso a) de la ley 19549, indicando expresamente los motivos por los cuales no correspondía el pago del "Anticipo", que, básicamente, se refieren a la ilegitimidad de la RG 5391 en virtud de la afectación de derechos y garantías constitucionales.

Agrega que en el reclamo impropio, la Sociedad requirió a la AFIP - DGI que suspenda la aplicación de la RG 5391, y por tanto, no le exija del Anticipo en tanto el mismo le provoca perjuicios graves y resulta inconstitucional.

Destaca que hasta el momento de la interposición de la presente, habiendo transcurrido más de 5 días hábiles administrativos, la AFIP-DGI no ha resuelto lo solicitado por la Sociedad mediante el Reclamo Impropio.



#38213281#385586160#20230927122416730

Funda la admisibilidad formal de la medida solicitada en los términos dispuestos en el art. 13 inc. 2) de la ley 26854 por cuanto han transcurrido 5 días desde la solicitud de la presentación del reclamo impropio sin que éste hubiera sido respondido.

Asimismo, entiende que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el CPCCN y en la ley 26854 para la admisibilidad sustancial de la medida solicitada, esto es: (i) la demostración de que la aplicación de la RG 5391 provoca un grave perjuicio de imposible reparación ulterior; (ii) la verosimilitud del derecho invocado; (iii) la verosimilitud de la ilegitimidad; (iv) el peligro en la demora; (v) la no afectación del interés público y (vi) la acreditación de que la suspensión judicial de la aplicación de la RG 5391 no produce efectos jurídicos o materiales irreversibles.

Finalmente, plantea la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la ley 26854: punto 4) del artículo 3, artículo 9 y punto 3) del artículo 13; hace reserva del caso federal y, solicita, en definitiva se haga lugar a la suspensión de los efectos de la RG 5391, con costas.

II.- Que en fecha 15/09/2023 se presentan los Dres. Micaela Bustos Berrondo y Mauro Gatti, en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos y emiten el informe previsto en el art. 4 de la ley 26.854.

En primer lugar, sostienen la improcedencia de la medida cautelar autónoma solicitada por la actora, en virtud de considerar que se está violando cabalmente





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

una garantía constitucional, como lo es el derecho de defensa en juicio de su representada, debido a que el proceso no se está tornando bilateral. Es decir, no se le está dando la posibilidad a su parte de producir en su defensa una prueba tan fundamental como lo es una pericia oficial.

Alegan, asimismo, que la parte actora inició una acción judicial (medida cautelar autónoma) sin haber agotado la vía administrativa, lo cual -por falta de habilitación de instancia- torna improcedente a la misma.

En segundo lugar, hacen una reseña de los aspectos normativos de los anticipos, para luego referirse específicamente a la Resolución General de la AFIP N° 5391/2023.

Respecto de esta última expresan que en el marco de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y por el artículo 7° del Decreto N° 618/97, sus modificatorios y sus complementarios, a través de la norma del título se estableció un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias (IG) a cargo de los contribuyentes y responsables enumerados en el artículo 73 de la norma del tributo (LIG, t.o. en 2019 y sus modificaciones) que cumplan alguno de los parámetros que el mismo enumera.

Destacan que de los considerandos de dicha preceptiva surge que a partir de la implementación de diversas políticas destinadas a consolidar la recuperación económica, el país inició una etapa de crecimiento económico que se sostuvo durante todo el año



#38213281#385586160#20230927122416730

2022 y se prolonga en el presente y que en ese contexto se ha observado que algunos actores económicos se han visto beneficiados al obtener ingresos extraordinarios por la producción y/o comercialización de ciertos productos, así como la prestación de determinados servicios, por lo que resulta necesario, en esa coyuntura, que el Estado implemente herramientas que coadyuven a la redistribución progresiva de los ingresos, en aras de paliar las desigualdades y reducir los impactos negativos sobre los sectores más vulnerables de la población.

Indican, asimismo, que se ha advertido que por aplicación de las normas del impuesto a las ganancias, en ciertos casos, el cómputo de quebrantos acumulados de ejercicios anteriores, ha producido la anulación del resultado impositivo, con la consecuente falta de determinación del impuesto de uno o más períodos fiscales y la consiguiente supresión del impacto extraordinario del ejercicio en curso.

En cuanto a los aspectos procesales de la medida solicitada, sostienen la inexistencia del cumplimiento de los presupuestos establecidos por el art. 230 del CPCCN y la ley 26854 para la procedencia de la medida solicitada.

Invocan la ausencia de verosimilitud del derecho, por cuanto el accionar del Organismo Fiscal encuentra su fundamento en las facultades que le otorga la normativa vigente que fuera dictada por el Congreso de la Nación.

Afirman, asimismo, la ausencia de peligro en la demora, en cuanto estiman que no se evidencia el







Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

riesgo de irreparabilidad o daño inminente que le causaría al accionante el estado actual de la cuestión para merecer un adelanto jurisdiccional, pues, en todo caso, el perjuicio que invoca sería patrimonial y resarcible.

Sostienen que existe en la medida solicitada una afectación del interés público que se traduce en la dificultad de llevar a cabo la actividad primaria del Estado, consistente en la satisfacción de las necesidades públicas, máxime en un contexto de crisis económica.

Finalmente, aseveran que la Resolución General (AFIP) N° 5391 se ajusta a los principios constitucionales de igualdad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad, legalidad y división de poderes, razón por la cual, concluye, la medida cautelar debe rechazarse.

III.- Que en fecha 26/09/2023 se pasa el expediente a despacho para resolver.

### **Y CONSIDERANDO:**

1.- Que en los presentes autos la empresa actora solicita medida cautelar de suspensión de los efectos de la Resolución General de la AFIP Nro. 5391/2023 (BO 20/07/2023) en el marco de lo normado por la ley 26.854.

A priori, he de precisar que la presente medida cautelar, que tiene por fin suspender los efectos de la Resolución General cuestionada, se sustenta, en términos generales, en lo dispuesto por el artículo 230 del C.P.C.C.N.. Es decir, nos encontramos frente a una solicitud de protección preventiva para quién todavía no



#38213281#385586160#20230927122416730

ha agotado la vía administrativa y en consecuencia no encuentra expedito el acceso a la jurisdicción para debatir la cuestión de fondo.

Formulado lo expuesto, corresponde en esta instancia avocarme a dilucidar la viabilidad de la medida solicitada por Genergiabio Corrientes S.A. en cuanto a la verificación de sus requisitos particulares, así como los recaudos adicionales dispuestos por la ley 26.854 regulatoria del régimen de las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional, que modifica en ciertos aspectos el régimen previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En lo que nos interesa, por resultar aplicable al supuesto en examen, el art. 13 inciso 2 de la ley 26854 dispone una serie de condiciones para el despacho favorable cuando en ellas se pide la suspensión de los efectos de un acto estatal.

Dichos requisitos son:

- Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior;
- La verosimilitud del derecho invocado;
- La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto;
- La no afectación del interés público;
- Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

Asimismo, se exige, mientras está pendiente el agotamiento de la vía administrativa, que el particular demuestre que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la solicitud sin que ésta hubiera sido respondida.

Que entrando al análisis de la medida cautelar solicitada por la actora, esto es: la suspensión de los efectos de la Resolución General de la AFIP Nro. 5391, corresponde evaluar lo denunciado en autos conjuntamente con la prueba aportada; ello, dentro del estrecho marco cognoscitivo propio de una medida cautelar.

Para ello, es dable destacar que la viabilidad de las medidas precautoria se halla supeditada a que se demuestre tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora (art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 329:4161 y 5160, entre otros).

Pues bien, dentro de este contexto deberá sopesarse debidamente la solicitud cautelar, ergo su factibilidad y alcance.



En tal sentido, el Alto Tribunal ha señalado que *"los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones"* (CS, nov. 4/97 "Wiater c/Min. de Economía", LA LEY, 1998-A, 281). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225; entre otros).

A su turno, ha expuesto Juan Carlos Cassagne que la medida cautelar autónoma o accesoria, con fundamento en los arts. 230 y 232 del CPCCN, requiere la concurrencia de dos requisitos: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, a los que la jurisprudencia ha añadido otros dos *"la existencia de graves perjuicios y la condición de que la medida no afecte el interés público"* (Derecho Administrativo Tomo II, Séptima Edición, Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot pág 227).

*"Es sabido que la suspensión cautelar de los actos administrativos procede en supuestos excepcionales y con criterio restrictivo, ello por estar comprometido el interés público y porque importa una limitación a la presunción de legitimidad, pero frente a situaciones de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que producirá un daño irreparable al administrado, los jueces no pueden aferrarse a esquemas legales demasiado rígidos, pues ello importaría una denegación de justicia. Así, para*





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

*establecer la existencia de la gravedad del perjuicio debe tenerse en cuenta la proporcionalidad en cuanto exceda considerablemente el impacto disvalioso o perjudicial que ocasiona la suspensión del acto administrativo” CFAR, Sala B Expte. 7004-C Sent. 54/11 del 17/11/11.*

En el caso de marras, la RG 5391 de la AFIP dispone textualmente en su artículo 1º: “Establecer un pago a cuenta del impuesto a las ganancias a cargo de los contribuyentes y responsables enumerados en el artículo 73 de la ley del referido gravamen, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones que, en la declaración jurada del período fiscal 2022 ó 2023, según corresponda -conforme el artículo 2º-, cumplan con las siguientes condiciones:

1. *Hayan informado un Resultado Impositivo -sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores conforme la mencionada ley del impuesto- que sea igual o superior a PESOS SEISCIENTOS MILLONES (\$ 600.000.000.-), y*

2. *no hayan determinado impuesto.*

*Quedan excluidas del referido pago a cuenta aquellas personas jurídicas que cuenten con un certificado de exención del impuesto a las ganancias -vigente en los períodos comprendidos en los párrafos primero y segundo del artículo 2º-, en los términos de la Resolución General N° 2.681, sus modificatorias y complementarias”.*

Que ponderando entonces las circunstancias reseñadas y los elementos de juicio y sin perder de vista la presunción de legitimidad de la que goza la



resolución administrativa cuestionada, se estima que, dentro del estrecho marco cognoscitivo de la precautoria requerida, el derecho invocado y la ilegitimidad denunciada lucen "*prima facie*" verosímiles.

A esta conclusión se arriba valorando que el control de verosimilitud importa un cálculo de probabilidades con apreciaciones objetivas, pero a la vez, *relativas y provisionales*, ya que lo contrario implicaría emitir juicios de certeza que se traducen en pre-opiniones de los juzgadores incompatibles con la tutela pretendida.

En el presente caso, de la documentación acompañada, surge que la sociedad actora debería pagar un Anticipo de \$ 214.038.513,46, mientras que para el ejercicio 2023 se proyecta una pérdida impositiva de \$ 192.982.140,69, lo que, en principio y dentro del marco de lo hipotético que implica el dictado de una medida cautelar, demuestra la existencia de la verosimilitud del derecho invocada.

Por otro parte, la actora ha dado cumplimiento a las condiciones de admisibilidad de la medida, dado que ha reclamado la suspensión de la resolución impugnada en sede administrativa y han transcurrido los plazos fijados en la ley sin que la AFIP haya respondido a su solicitud (art. 13 ley 26854).

También se advierte que la suspensión pretendida no produce afectación del interés público ni genera efectos jurídicos o materiales que puedan configurarse como irreversibles, toda vez que el tiempo de suspensión de lo decidido está a las resultas del interés que el órgano administrativo demuestre en





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

resolver la cuestión con prontitud y quede, en su caso, habilitada la vía judicial respectiva (demanda contenciosa en los términos del art. 25 y concordantes de la ley 19549).

Ahora bien, en lo que respecta al cumplimiento del requisito de existencia de peligro en la demora, si bien es dable destacar que uno y otro se hallan relacionados de manera que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y viceversa (C.N. Cont-Adm Fed, Sala II, LL, T 1984-A, pag 459), he de precisar que tal peligro surge con suficiente entidad y con el grado propio de este tipo de procesos atento que el 22/08/2023 se produjo el vencimiento de la primera cuota del Anticipo, razón por la cual existe un riesgo inminente de que la demandada trabe medidas cautelares contra Genergiabio Corrientes S.A., pues la falta de ingreso a tiempo del anticipo habilita al Fisco a su reclamo vía ejecución fiscal (conf. artículo 12 y 92 de la ley 11683).

Finalmente y atendiendo a los fines tenidos en miras por el legislador al disponer el traslado -esto es un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud-, se advierte que la AFIP ha formulado afirmaciones dogmáticas de sus atribuciones y facultades sin referencia específica al perjuicio y afectación en el cobro judicial de las deudas tributarias, ni ha establecido fundadamente cual sería el menoscabo concreto a la recaudación de las rentas nacionales alegado.



#38213281#385586160#20230927122416730

Por lo expuesto concluyo que la medida solicitada debe prosperar, la que se dicta hasta tanto esté pendiente el agotamiento de la instancia administrativa.

Que respecto a la contracautela por las costas y daños que la medida pueda ocasionar, estimo justo y apropiado determinar la fijación de una caución real por la suma de \$ 64.211.554, equivalente al 30% de la suma total que debería ingresar Genergiabio Corrientes S.A. en concepto de Anticipo (art. 10 inc. 1 ley 26.854).

2.- Que resta emitir opinión respecto de los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 3, punto 4; 9; 10, punto 2; 13, punto 3; de la ley 26854 formulados por la actora.

Que respecto al punto 4 del art. 3 de la ley 26854, estimo prematuro emitir un pronunciamiento en tanto la actora ha logrado la protección cautelar, la que surtirá efectos mientras esté pendiente el agotamiento de la instancia administrativa. Sólo transcurrido dicho plazo resultará pertinente examinar si la norma resiste el test de constitucionalidad.

Que respecto al art. 9 de la ley 26854, atento que en el presente caso se ha otorgado la medida cautelar requerida, resulta inoficioso emitir pronunciamiento.

En relación al art. 10 de la ley 26854, habiéndose establecido en este caso puntual una caución real como contracautela, ello me exime de avocarme al tratamiento del planteo.







Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 1

En lo que concierne a la tacha de constitucionalidad del efecto suspensivo del art. 13 inc. 3, de la ley 26.854, comparto el criterio sostenido por este Juzgado en causas similares a la presente en cuanto dispuso admitir dicha tacha; ello, en virtud de que tal precepto legal desnaturaliza el fin último de la medida precautoria, cual es evitar la frustración de derechos de la actora, restándole toda eficacia al decisorio al permitir innovaciones sobre los aspectos que han sido cautelados.

Por lo expuesto, procede admitir la inconstitucionalidad del art. 13 en su inc. 3 de la ley 26.854 en cuanto dispone que *"El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo"*.

En mérito de lo expuesto,

### **RESUELVO:**

1.- Hacer lugar a la medida cautelar requerida y ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP - DGI) la suspensión de los efectos de la Resolución General de la AFIP 5391/2023 hasta tanto opere el vencimiento del plazo procesal que legalmente dispone Genergiabio Corrientes S.A. para promover la correspondiente demanda contenciosa en los términos de los artículos 25 y concordantes de la Ley 19.549 en caso que sea rechazado el reclamo impropio presentado por dicha parte el 17/08/2023 ante la AFIP; previa caución real que deberá brindar la accionante.



2.- Admitir la inconstitucionalidad del art.  
13 inc. 3 de la ley 26.854 en la parte citada  
precedentemente.

Notifíquese, insértese y hágase saber.

